



DOCTOR:

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

E. S. D.

REFERENCIA: SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE PRUEBA OFICIOSA.

RADICACIÓN: 76-001-23-33-010-2016-01950-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE: CARACOL S.A.

DEMANDADO: METRO CALI S.A. EN RESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL Y OTRO.

Respetado señor Magistrado, cordial saludo,

Le escribe **ANDRÉS FELIPE SALGADO ARANA**, mayor de edad, identificado como corresponde en el respectivo pie de mi firma, con personería adjetiva dentro del proceso de la referencia y actuando en calidad de apoderado de **METRO CALI S.A. EN RESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL** (en adelante Metro Cali S.A.), por medio del presente escrito y con el respeto que me caracteriza, me permito solicitar reconsideración dentro del proceso de la referencia, lo cual, me permito sustentar en los siguientes términos:

1.-La discusión que se pretende dirimir en el asunto de la referencia, corresponde, en estricto sentido, al examen de legalidad de los actos que antecedieron el negocio jurídico que se celebó entre Metro Cali S.A. y Caracol S.A.; negocio jurídico que se ventiló a través del proceso ordinario de expropiación, identificado con el radicado No. 2016-00257-00 promovido por la entidad, sobre los mismos lotes, ante el H. Juzgado 14 Civil del Circuito Judicial de Santiago de Cali, el cual concluyo con la sentencia No. 18 de abril de 2019, que presta merito a cosa juzgada, señalando:

“(RESULEVE:

PRIMERO: Declarar por motivos de utilidad pública o de interés social, a favor Metrocali S.A., la expropiación del Lote No 1. distinguido con matrícula inmobiliaria No. 370-686508 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali, alinderado al acta de entrega anticipada que obra a fol. 834 del expediente.



SEGUNDO: Declarar por motivos de utilidad pública o de interés social, a favor Metrocali S.A., la expropiación parcial del Lote No 2, distinguido con matrícula inmobiliaria No. 370-686509 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali alinderado conforme al acta de entrega anticipada que obra a fol. 834 del expediente, en favor del demandante Metrocali S.A.

TERCERO: Tener como entrega definitiva de los predios No. 1. Identificado con las matrículas inmobiliarias No. 370-686508 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali y No. 2 con matrícula inmobiliaria No. 370-686509 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali; la realizada de manera anticipada en el acta de entrega del 13 de julio de 2017.

CUARTO: Ordenar la inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali, del acta de entrega anticipada del 13 de julio de 2017 y de la presente sentencia.

QUINTO: Ordenar la cancelación de los gravámenes que recaigan sobre los predios No. 1, identificado con las matrícula inmobiliaria No. 370-686508 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali y No. 2 con matrícula inmobiliaria No. 370-686509 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali.)

2.- Que en audiencia inicial que surtió el día 22 de agosto de 2019 dentro del presente asunto, se determinó como problema jurídico:

“Problema jurídico: El problema jurídico se plantea en los siguientes términos:

Se deberá determinar si los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho, y en ellos se tuvieron en cuenta aspectos dentro del proceso de expropiación, tales como el avalúo vigente de los predios, la certeza de la titularidad de los mismos, y si se debía efectuar la declaratoria de utilidad pública de interés social para su procedencia.

Igualmente, se deberá definir si hubo una configuración de un silencio administrativo positivo por la presunta demora de METROCALI S.A. en la resolución del recurso de reposición interpuesto en contra de las Resoluciones Nos. 912.110.0029 y 912.110.030 del 11 de febrero de 2016.” (Negrillas y subrayas propias.)



Tenemos entonces que, con el proposito de resolver la contienda, el H. Despacho, en ejercicio de su facultad oficiosa, decretó como prueba pericial, lo anterior con el proposito de esclarecer los puntos oscuros, y en particular, en determinar topográficamente el predio sujeto a expropiación .

3.- El H. Despacho, mediante audiencia de pruebas surtida el 01 de octubre de 2019, ordeno de manera oficiosa “*REQUERIR*” a la UNIVERSIDAD DEL VALLE con la finalidad de que se realice el levantamiento topográfico y estudio de títulos del predio ubicado en el Corregimiento de Navarro, costado sur de la Carrera 28D entre la Calle 96 y la Traversal 103 vía Navarro, sector rural del MUNICIPIO DE CALI, **en aras de reforzar los estudios utilizados en los avalúos fundantes de las Resoluciones Nos. 912.110.0029 y 912.110.30 del 11 de febrero de 2016 proferidas por METROCALI S.A.**

4 – La Universidad del Valle, a través de la Escuela De Ingeniería Civil Y Geomática, previa información que le fue aportada en debidamente forma por parte de la entidad, presentó cotización de los servicios denominandolo: “*Oferta técnica y económica para la realización de Levantamiento Topográfico y Estudio de títulos del predio ubicado en el Corregimiento de Navarro, costado sur de la carrera 28D entre la Calle 96 y la Transversal 103 vía Navarro, sector rural del MUNICIPIO DE CALI.*”, por un valor de e \$ **101.228.978.**

5.- Ahora bien, es menester señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 2080 de 2021 por medio del cual se modifica el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011¹, es el Juez quien determinara una vez se haya surtido la pericia el valor de la misma, la cual, por ser oficiosa en el asunto en materia, debiera ser asumida en partes iguales. No obstante, y siendo consecuentes con lo indicado en líneas que preceden, la prueba carece de utilidad y pertinencia, puesto que, la discusión fue zanjada en su totalidad con la precitada sentencia proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, quien ordenó la

¹ **ARTÍCULO 221. Honorarios del perito.** Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto que presta mérito ejecutivo, contra el cual solo procede el recurso de reposición. En el evento en que se tramite el proceso ejecutivo la competencia se regirá por el factor conexidad cuando el ejecutado sea una entidad pública. Si el ejecutado es un particular conocerá de este proceso ejecutivo la jurisdicción ordinaria.

La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea decretado a solicitud de las dos partes, así como cuando sea decretado de oficio, corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en que una de las partes no pague que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.

PARÁGRAFO. De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.

expropiación judicial, y a su vez, dichos valores fueron pagados por parte de Metro Cali S.A., al hoy demandante.

Por otra parte, es perentorio indicar que, atendiendo la finalidad de la prueba decretada, de cara a establecer la legalidad de los actos administrativos, la misma, se puede obtener de la descripción del inmueble que se estableció en los folios de matriculal que se crearon como consecuencia de la orden judicial del proceso ordinario de expropiación judicial plurimencionado. Lo cual, conllevaría a que el despacho accediera a la información, y de esta forma evitar un gasto al erario público con la práctica de la prueba oficiosa ordenada.

6.- Por último, la entidad en la actualidad mediante **Resolución No. 10873 del 11 de octubre de 2019 de la Superintendencia de Transporte**, por lo tanto, la entidad no podrá efectuar compensaciones, pagos, arreglos o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, sin la autorización previa de su ente nominador, de conformidad con el inciso 1° del artículo 17 de la ley 550 de 1999.

PETICIÓN

De la manera más respetuosa, me permito solicitar al H. Despacho, se sirva aclarar:

PRIMERO: Se sirva reconsiderar la práctica de la prueba pericial en aras de proteger los recursos públicos, con ocasión a los elementos discutidos dentro del proceso ordinario de expropiación judicial que se surtió en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, en donde incluso se realizó por parte de Metro Cali S.A. los respectivos pagos a la entidad demandante.

SEGUNDO: De manera subsidiaria y en caso de no proceder a la petición anterior, proceda a proferir providencia por medio de la cual se fijen los honorarios de manera posterior a la práctica de la pericia

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE SALGADO ARANA

C. C. No 1.113.637.820

T. P. 221.925.